

En el examen de las violaciones a los derechos humanos que debería llevar a la verdad y la justicia, hay un elemento que deliberadamente se quiere dejar en la oscuridad.

Nos referimos a la responsabilidad de los Altos Mandos de las FF.AA. -y sus cómplices civiles- que arrastraron a las instituciones militares y policiales a un meditado y prolongado proyecto político represivo, diseñado por ellos mismos y sus mentores ideológicos.

Esa responsabilidad quedará en evi-

Arturo Valenzuela en su libro "El quiebre de la democracia en Chile" - "por la defensa de sus pequeños intereses personales y de grupos determinados según criterios de ventaja electoral, rehusando ver la importancia de preservar el régimen propiamente tal". Y porque algunos de sus más poderosos e influyentes grupos internos asumieron como propio el modelo impuesto por la dictadura.

No se restan a esta posición, amplios

Así como el nazismo recibió su impulso principal de los grandes magnates de la industria, el comercio y la banca de Alemania, en Chile el empujón inicial lo recibió la dictadura de la burguesía y el gobierno y los monopolios norteamericanos que luego le dieron el oxígeno para su supervivencia y desarrollo, que cortaron cuando ya no sirvió eficazmente a sus intereses y el régimen empezó a peligrar bajo el embate de las movilizaciones populares.

En este contexto, no cabe diluir respon-

350 días de democracia

En Chile todavía hay 268 presos políticos.

sabilidades o radicarlas exclusivamente en los ejecutores. Hay una responsabilidad básica, por razones de mando y proyecto político, en Pinochet, Merino, Leigh y Mendoza, perpetradores del golpe militar y responsables máximos de una política sangrienta y genocida. Los Altos Mandos militares, los civiles conspiradores y los máximos beneficiarios del sistema, no pueden pasar inadvertidos en esta hora de balance y justicia que debería comenzar a partir del conocimiento del Informe Rettig, por insuficiente que éste resulte frente a la magnitud de lo ocurrido.

Que paguen los jefes

dencia con el Informe Rettig, puesto que en él aparecerán miles de asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros que no pudieron ser ajenos a una decisión y planificación superior, que configuraron en definitiva una política de terrorismo de estado. De ella deben responder, en primer lugar, los Altos Mandos con Pinochet a la cabeza.

Sería claramente insuficiente -y mentiroso- reducir el problema al examen casuístico de las más graves violaciones a los derechos humanos, destinadas eventualmente a la impunidad, dadas las condiciones y previsibles compromisos secretos, para abrir paso luego a la "reconciliación".

Aparte del temor a una nueva aventura militar -que la mayoría de la población desestima- diversas razones explican el propósito de no ahondar en la responsabilidad de los Altos Mandos ni en la génesis y desarrollo del proyecto dictatorial en el cual se inscribe el terrorismo estatal.

Obviamente, a las Fuerzas Armadas les alarma que esos puntos sean aclarados. Sus mandos prefieren mantener el mito de los "salvadores de la patria y constructores de la nueva democracia", pregonado por Pinochet.

Tampoco le interesa a la derecha, que participó activamente en la preparación del golpe y fue después colaboradora de los militares en su proyecto fundacional sustentado en una represión implacable. Pero fundamentalmente porque los empresarios llenaron sus bolsillos con una política económica y social hecha a su imagen y conveniencia -que se preocuparon de administrar- funcional a las exigencias de reestructuración del capitalismo mundial.

No es, por supuesto, un tema predilecto de la Democracia Cristiana, presente en los trajines del golpe militar y en los meses que lo siguieron. Sus dirigentes optaron entonces -como escribió el sociólogo



EL 19 de septiembre de 1973 los cuatro miembros de la junta militar asistieron a una misa en conmemoración de la Independencia nacional. De izquierda a derecha, el general Gustavo Leigh (FACH); general Augusto Pinochet (Ejército); almirante José Toribio Merino (Marina) y, semi escondido, el general César Mendoza (Carabineros). Los cuatro son los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile.

sectores de los partidos de la Concertación que adhieren ahora a los valores asociados a la economía de mercado, como prefieren llamar a la herencia económica del pinochetismo.

Las violaciones a los derechos humanos no fueron casuales ni meras expresiones del salvajismo oculto en la personalidad de muchos uniformados ni correspondieron al costo inevitable de una guerra declarada o de hecho, que no existió. La verdad es que derivaron de un concreto cuadro político y de clase que debe remarcarse.

JDC da la pauta

Ha dicho Jacqueline Saintard, vicepresidente de la Democracia Cristiana -y antes el propio Jaime Castillo Velasco- que será fácil saber los nombres de los violadores de los derechos humanos que no se darán a conocer en el Informe Rettig.

Bastará, nos dice la sra. Saintard, ligeramente ruborizada, con preocuparse de averiguarlo. Si están todos los datos: la fecha, la rama de las FF.AA. o Carabineros que practicó la detención, si se sabe el recinto militar en que estuvo el prisionero y otros detalles, con un poquito de esfuerzo podrá saberse quiénes detuvieron a la víctima y, por qué no, el nombre de sus asesinos.

La señora Saintard no indica cómo podría hacerse.

Durante muchos años esos datos han sido conocidos y no se ha podido conseguir hasta ahora el nombre de casi ningún victimario.

¿Insinúa que los tribunales terminarán ahora las investigaciones emprendidas hace tanto tiempo? Enhorabuena si fuera así porque Saintard nos estaría anunciando la derogación de la ley de amnistía o el cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema que impide toda investigación.

Si así no fuera ¿sugiere que habría que ir a preguntar a regimientos y comisarías? ¿Supone dulcemente que allí van a entregar esa información a cualquier hijo de vecino -o digamos al ministro Rojas- si siempre la han mantenido en secreto ya que involucra no sólo al hechor sino a sus jefes?

Pero no seamos negativos. Aprovechemos la buena voluntad de la sra. Saintard. Cuando se dé a conocer el Informe Rettig ella podría ayudar -ya que "será muy fácil"- a que los familiares de los muertos consigan los nombres de sus asesinos. Cuestión de una pizca de buena voluntad ¿no es así, Jacqueline?

En cambio, lo que no está resultando nada fácil a Saintard es hacer callar a la Juventud Demócrata Cristiana. La JDC ha colocado en aprietos al gobierno al exigir una acusación constitucional contra la Corte Suprema. A lo menos nueve magistrados, dice la JDC (y se queda corta) pueden ser acusados por "notable abandono de sus deberes" durante 16 años. Son los ministros Leonel Beraud, Marcos Aburto, Efrén Araya, Hernán Cereceda, Osvaldo Faúndez, Servando Jordán, Emilio Ulloa, Germán Valenzuela y Enrique Zurita. La JDC -a diferencia de sus mayores- no tiene pelos en la lengua para señalar que la Corte Suprema fue "cómplice del gobierno del general Pinochet en la interpretación de toda normativa legal". La JDC atribuye a la Corte Suprema grave responsabilidad en el elevado número de detenidos desaparecidos y personas arrestadas que murieron en la tortura o que fueron asesinadas por la DINA y la CNI debido a que los tribunales no acogieron sus recursos de amparo.

La valiente actitud de la JDC, sin embargo, no tiene ninguna posibilidad de materializarse en una acusación constitucional. La sra. Saintard no dará facilidades para eso. En cambio a RN y la UDI les "será muy fácil convencer al PDC y al gobierno. El inefable ministro Krauss ya anticipó cuál será la posición del gobierno de la Concertación-RN-UDI.



Funeral de Andrés Silva Sillahue el 28 de agosto de 1990, en el cementerio de Futrono. Los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos reclaman justicia en un país que carece de autoridades con sensibilidad y coraje para atender las demandas de la gente humilde.